



LA ZONA GRIS EN COLOMBIA : MINERÍA ILEGAL, CONTROL TERRITORIAL Y DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL.

La “zona gris” se refiere a espacios en los que la autoridad estatal es débil o ausente, permitiendo que actores ilícitos operen sin llegar al nivel de conflicto armado abierto, pero generando desafíos graves a la gobernabilidad y al Estado de derecho (Torres, 2019). Conceptualmente, representa un área de ambigüedad estratégica donde el control territorial es disputado mediante tácticas no convencionales como la corrupción, violencia selectiva y economías ilegales. En Colombia, la minería ilegal encarna esta zona gris, pues grupos armados aprovechan la ausencia del Estado para extraer recursos naturales ilícitamente, financiando actividades criminales y sociopolíticas que afectan la seguridad nacional (ANEPE, 2021).

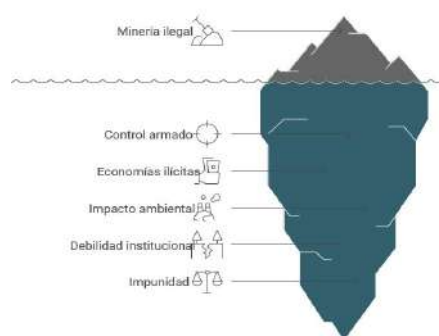
Comprendiendo la autoridad estatal desde el control total hasta la ausencia total



Elaboración propia usando la herramienta Napkin I.A.

Entre las características de la minería ilegal en estas zonas destacan la sustitución del Estado por actores armados ilegales que imponen control territorial y normativo, la articulación con economías ilícitas como el narcotráfico, y la grave afectación ambiental y social, especialmente en poblaciones vulnerables (Rubio & Díaz, 2023). La violencia derivada de estas actividades y la corrupción vinculada a cadenas de suministro ilegales profundizan la debilidad institucional y consolidan economías criminales que actúan impunemente en regiones donde el Estado no puede ejercer control pleno, generando un círculo vicioso difícil de romper (Torres, 2019).

La minería ilegal esconde problemas sistémicos más profundos.



Elaboración propia usando la herramienta Napkin I.A.

Un ejemplo paradigmático es la minería ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño y el departamento del Chocó, donde grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN han instaurado economías extractivas ilícitas mediante el uso de la violencia para el control territorial (Forero & Restrepo, 2024). La contaminación por mercurio en el río Atrato, declarado sujeto de derechos, y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes, reflejan la multifacética crisis socioambiental y de seguridad derivada de la zona gris minera, evidenciando la necesidad imperiosa de enfoques integrales que articulen política, seguridad y protección ambiental (Rubio & Díaz, 2023; Torres, 2019).